

La movilización social durante el gobierno de la alianza PRO-CC-UCR.

Marisa Duarte.

Cita:

Marisa Duarte (2017). *La movilización social durante el gobierno de la alianza PRO-CC-UCR. XII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-022/605>

XII Jornadas de Sociología

Recorridos de una (in)disciplina

La Sociología a sesenta años de la fundación de la Carrera

22 al 25 de agosto de 2017

Título de la ponencia: La movilización social durante el gobierno de la alianza PRO-CC-UCR

- ✓ Nombre y Apellido Autora: Marisa Duarte
- ✓ Eje Temático: Sociología Económica
- ✓ Nombre de mesa: La economía argentina entre los gobiernos kirchneristas y el de Cambiemos. Una mirada desde la sociología económica.
- ✓ Institución de pertenencia: IADE / UBA
- ✓ E-mail: mduarte14@hotmail.com
- ✓ Resumen o Abstract (máximo 200 palabras)

El artículo se propone analizar las características del inicio del ciclo de protesta y sus potenciales derivaciones, la reacción del gobierno y sobre el conjunto de la representación política. Para ello, se brinda una definición sintética de ciclo de protesta, se analizan las condiciones sociales que alientan la reacción, se describen los principales episodios, el rol de los principales actores, el efecto sobre el sistema político y los interrogantes que abre la presente etapa.

- ✓ Palabras clave

Protesta. Economía. Bloque de poder. Representación. Democracia.

La política económica actual se asienta en una alianza entre fracciones capitalistas (entre las cuáles se encuentra el sector financiero, el capital extranjero, las grandes empresas exportadoras, la corporación judicial y los grandes medios de comunicación) y sectores medios, todos amparados en la ideología del libre mercado y el individualismo meritocrático. La ideología de esta alianza de clases remite al viejo paradigma oligárquico basado en el ejercicio ilimitado del poder (donde incluye a la represión como un elemento más). Hasta el momento no rige un programa de gobierno ni una política económica definida; en cambio se ha observado la práctica de una lógica económica que avanza sobre el Estado y la sociedad argentina a impulsos de las transferencias a los sectores más concentrados. En efecto, la alianza en el gobierno no ha logrado –ni ha querido- traducir en actos de gobierno el interés general de la nación y, por tanto, no ha logrado construir hegemonía.

Este bloque social primó sobre otro que comprende a los trabajadores (ocupados y desocupados) a los pequeños y medianos empresarios, la industria, el sector financiero local que se vio reflejada heterogéneamente en la política económica implementada en los anteriores doce años. Esa política estuvo abocada a contener los precios internos mediante regulaciones y participación del Estado en la economía –directa e indirectamente-, proteger los niveles de empleo alentando la producción y el consumo interno, y de ingresos (de los trabajadores ocupados –mediante paritarias y el piso del Salario Mínimo Vital y Móvil- y desocupados –mediante la política social-), evitar los ciclos de endeudamiento con fines financieros apostando al endeudamiento con destino productivo (las centrales hidroeléctricas y nucleares), etc. Dicho bloque construyó hegemonía a partir de una política económica y social inclusiva, pero sin atentar directamente contra los ejes del poder económico en la Argentina.

La alianza anterior fue derrotada luego de doce años en virtud de que no consiguió desarmar el andamiaje del poder económico y de que una parte del electorado se desplazó y respaldó al bloque social conservador. En efecto, el bloque defensivo no consigue mantener la construcción ideológica y cultural que garantice la continuidad de las reformas, quedando limitada a la suerte de la política económica y su marco externo. En este punto confluyen el accionar de la derecha contra los aciertos del bloque previo,

¹ Doctora en Sociología, docente de la UBA, directora de Realidad Económica y Presidenta del IADE.

un aprovechamiento de sus errores y la explotación de la idea de un futuro promisorio para todos. Luego del triunfo electoral, el gobierno llevó adelante todas las políticas necesarias para resarcir a los sectores del capital de los doce años de contención, mientras no sólo no se produjo ningún avance para los sectores trabajadores, sino que comenzaron a afectarse derechos conseguidos previamente.

Luego de un año 2016 a la espera de los beneficios de la nueva etapa, el proceso de implantación de una política conservadora con rasgos represivos comienza a presentar fisuras puestas de relieve por una sostenida movilización social que comenzó atomizada pero que encuentra cada vez más espacios de confluencia.

El año 2017 comenzó con una sucesión de movilizaciones cuyo objetivo es limitar el avance de las políticas de ajuste. El artículo se propone analizar las características del inicio del ciclo de protesta y sus potenciales derivaciones, la reacción del gobierno y sobre el conjunto de la representación política. Para ello, se brinda una definición sintética de ciclo de protesta, se analizan las condiciones sociales que alientan la reacción, se describen los principales episodios, el rol de los principales actores, el efecto sobre el sistema político y los interrogantes que abre la presente etapa.

El ciclo de protesta

El estudio de los movimientos sociales recurre al concepto de ciclo de protesta para tratar aquellas secuencias de confrontación que cumplen una serie de características: a) la exaltación del conflicto que atraviesa por completo el sistema social (desde los clubes, las escuelas, las calles, las ciudades, las relaciones industriales); b) la difusión sectorial y geográfica de la protesta; c) la importancia de las organizaciones de movimiento, no siempre controladas por uno de ellos, que actúan a partir de acontecimientos impredecibles; d) la producción de nuevos marcos de significado, y e) la expansión de los repertorios de contestación, creando nuevas formas de protesta; desde las más institucionales y pautadas a actividades de mayor confrontación y versatilidad táctica (Tarrow, 2002, pp.105-106). Cada una de estas dimensiones se presenta primero tímidamente, para luego crecer luego recobrar la relativa paz social.

El repertorio es un conjunto de medios para efectuar demandas de distinto tipo, acotados por los recursos, por la familiaridad con que se recurre a ellos y por la experiencia en utilizarlos (Traugott, 2002). Tal y como señala Tarrow, únicamente cuando la innovación se difunde y pasa a ser una práctica rutinaria podemos decir que ésta ha pasado a formar parte del repertorio de lucha (la acción se hace modular). Los momentos de locura no transforman directamente los repertorios sino que “contribuyen a su evolución

a través del desarrollo dinámico de ciclos mayores de movilización en los que las innovaciones de acción colectiva [...] terminan por formar parte del repertorio aceptado” (Tarrow, 2002, p.102).

¿Por qué las protestas ocurren en un momento y no en otro? Porque todo movimiento social surge cuando existen determinadas oportunidades políticas (Kriesi, 1995); esto es, un conjunto de recursos, estructuras institucionales, componentes ideológicos, precedentes históricos para la movilización que facilitan el desarrollo de la protesta (Kitschelt, 1986). Ello quiere decir que, aunque no determinan completamente el curso de los movimientos sociales, establecen la emergencia y particular estructura de los problemas a los cuales responden las movilizaciones (Aguilar, 2003, cap 4).

Las condiciones que facilitan la protesta

Las reacciones a la política conservadora comenzaron de forma incipiente a principios de 2016, en forma dispersa, atomizada y con reclamos de perjudicados puntuales. Fueron creciendo a lo largo del año y se intensificaron en estos primeros meses de 2017, en particular en el mes de marzo.

Los factores que en este momento inducen la emergencia de manifestaciones colectivas son de diversa índole. En términos políticos, la presencia de un gobierno que profundiza su componente conservador al llevar adelante políticas destinadas a beneficiar a los sectores más concentrados a nivel local y global, junto a una política cada vez más restrictiva en términos sociales, económicos y políticos.

Ello se une a la inexistencia de un actor político (partidario o no) que cumpla con su derecho y obligación democráticos de ejercer la oposición. Si bien el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria, ha conseguido el respaldo de los opositores suficientes para hacer avanzar en el Parlamento las políticas regresivas.

La poca presencia de voces críticas, que canalicen el descontento social en aumento, deja abierta la posibilidad de la acción directa como la única modalidad de expresión de los sectores desfavorecidos por las políticas –un derecho legítimo en regímenes democráticos. Salvo honrosas excepciones, desaparecieron de hecho los partidos políticos de oposición y los líderes que conduzcan políticamente el descontento, lo que hace que la ocupación de los espacios públicos (desde las calles, las plazas y las sedes del poder político y/o económico) sea la única manera de romper la cerrazón ideológica imperante y de evitar el avance del gobierno.

No menos importante es la deriva autoritaria y represiva que adoptó la gestión frente a las protestas, lo que -contrariamente a lo buscado- intensifica la contestación. Este hecho pudo constatarse en referencias y declaraciones de los gobernantes que recuerdan los antecedentes más autoritarios usados como estandartes por la vieja oligarquía argentina (como el negacionismo sobre la dictadura, la asociación de alguna política con una nueva “Campaña al Desierto”, el desprecio de “la política” de los otros, el profundo carácter de clase de la política).

En el plano económico, se verificó la sucesión de medidas inmediatas que favorecen la concentración de recursos en pocas manos, unida a la apertura de importaciones y el aumento de tarifas que atenta contra la producción nacional, el empleo y el salario. Ello da como resultado magros logros económicos y pésimo balance social en el año y medio de gobierno, lo que implica una mala perspectiva y el paulatino abandono de los sueños de abundancia que prometía la alianza gobernante.

Los medios de comunicación forman parte de los sectores aliados al gobierno, por lo cual protegen la gestión y sus políticas a la vez que ocultan o criminalizan las movilizaciones. Para contrarrestar esta situación la ciudadanía ha puesto en marcha una batería de recursos novedosos puestos a la tarea de democratizar una comunicación sesgada. A la vez la manipulación informativa, la mentira y la desidia del gobierno apuntalada por los medios estimulan la contestación de la ciudadanía.

Los medios de comunicación tienen un papel esencial en la estrategia gubernamental, ya que son los que dan voz o silencian la protesta, a la vez que articulan discursos de deslegitimación de la misma y de respaldo al gobierno. El oficialismo consiguió controlar la opinión pública a través de los medios en el primer año de gestión; mientras que en 2017 la infinidad de herramientas de comunicación y el avance de la realidad se imponen a las estrategias mediáticas. El gobierno considera posible controlar la opinión pública a través de la ignorancia o la represión. En este sentido confían en un modelo de gestión de la información basado en el elitismo puro (Sampedro, 2000, p.79). A largo plazo, el descrédito de los medios de comunicación fragua en la ciudadanía y lleva a la incapacidad de continuar ocultando la realidad.

En paralelo al cerco mediático aumenta el uso de múltiples formas de comunicación, a través de Internet y/o los teléfonos celulares. Estos sistemas actúan como facilitadores de las movilizaciones al permitir a la ciudadanía una información más plural, al instante y veraz o comprobable. La capacidad de transmisión horizontal de la información, a través de las redes sociales, permitió articular rápidamente las protestas y mantener modalidades de información sobre las diferentes acciones descentralizadas.

La estrategia informativa del gobierno está dirigida a ignorar y criminalizar la protesta o vincularla a los intereses partidistas de la oposición. Esta estrategia fue efectiva al inicio del gobierno pero comienza a ser contraproducente a partir de la negativa a resolver el conflicto docente. Allí, el gobierno no sólo no resolvió el conflicto sino que lo incentivó.

La estrategia del gobierno frente a la protesta se centra, por un lado, en la deslegitimación de los actores desafiantes, en la criminalización y en la asociación de los manifestantes a militantes del Frente para la Victoria como estrategia de desprestigio de la principal dirigente del FPV. Esta estrategia encubre varios objetivos: el gobierno muestra que eligió con quien enfrentarse, refuerza el rechazo sobre la dirigente, apuntalando y resguardando a otros referentes. Frente a ello, la falta de respuesta de la dirigente, debilita la dirección del proceso de movilización de la base social que sintoniza con ella; a la vez, que incentiva el proceso de movilizaciones.

Así como un gobierno integrador tiende a desactivar las causas de las protestas, un gobierno que excluye la disidencia tiende a reforzar la identidad de los desafiantes y a generar solidaridades que, de no mediar el rechazo o la agresión abierta por parte del primero, no lo harían (Kriesi, 1992, pp.127 y ss.). Para entender este hecho, es necesario marcar que la ciudadanía argentina cuenta con un amplio repertorio de protesta –que se ha diversificado en estos días-, que tiene antecedentes cercanos de programas de ajuste lo que le permite tener una perspectiva de la situación actual, que tiene la vivencia de una sociedad más justa y donde el aprendizaje realizado es utilizado como recurso para resistir la degradación.

Caracterización de las protestas

Las primeras protestas luego del ascenso de Cambiemos se produjeron en virtud de la reacción de los gremios vinculados a la administración pública que se vieron inmediatamente afectados por una rápida y extensa reducción del empleo en el sector, a la vez que aumentaba las designaciones en cargos jerárquicos. En paralelo, se vivió una etapa de escasa intervención de las instancias de representación –incluida parte del sindicalismo nucleado en la CGT- que se mantuvo expectante a la espera de la elucidación de un programa económico y político del gobierno.

A inicios de 2016 continuaron las desvinculaciones de empleados públicos a raíz de la desarticulación de infinidad de programas sociales y asistenciales que tuvieron vigencia en los gobiernos anteriores lo que mantuvo focos de reacción por parte de los gremios estatales. A la vez, comenzaron a evidenciarse

los primeros cierres de fábricas que dieron lugar a protestas puntuales en las puertas de las empresas y en el Ministerio de Trabajo.

El año 2016 se inició marcado por marchas y concentraciones realizadas frente a los ministerios (de Economía, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Ciencia y Técnica, de Educación) y a las empresas, protagonizadas por trabajadores afectados por la eliminación de puestos de trabajo.

A mediados de 2016, comenzaron a cobrar importancia las concentraciones y ruidazos contra los aumentos de precios de los servicios públicos, a instancias de la articulación realizada por la Multisectorial contra el Tarifazo. También comenzó a cobrar forma la resistencia de los científicos frente a los recortes en el ingreso a la carrera del investigador y otras instancias de formación; conflicto que se extendió durante el resto del año. Los docentes realizaron algunos paros por reclamos salariales, que se unió a infinidad de gremios que comenzaron a presionar por la reapertura de las paritarias ya que la inflación superaba los aumentos previstos. Asimismo, en las provincias se producían cortes de rutas y en el área metropolitana comenzaron a hacerse más difundidas las ollas populares y creció la asistencia a los comedores y merenderos.

Una mención importante merecen las protestas que rechazaron el aumento del carácter represivo del gobierno. Entre las medidas represivas deben mencionarse: la prisión de la dirigente social indígena y Diputada del Parlasur Milagro Sala (ocurrida en diciembre de 2016), el proceso judicial llevado a cabo contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pretensión de encarcelar a la Presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini (4 de agosto de 2016), la sucesión de crímenes violentos ocurridos en la provincia de Santa Fe unido a la desidia de la policía de la provincia (ocurridas el 25 de agosto), el aumento de los asesinatos y el hostigamiento a pobladores y comunidades campesinas para apropiarse de las tierras.

Otro gran grupo de manifestaciones se produce en torno a nuevos colectivos: las mujeres contra todo tipo de violencia, los activistas por los derechos al medio ambiente (en defensa de la calidad del agua, la tierra, el aire y la biodiversidad), los/las militantes por la identidad de género.

En tanto los actores consolidados en la tradición política argentina llevaron adelante la marcha de los estatales protagonizada por ATE en febrero de 2016 y la CGT convocó a una concentración en la Avenida Paseo Colón el día 29 de abril del mismo año para pedir la corrección del rumbo económico.

El clima de protesta fue creciendo hasta alcanzar la masividad a inicios de 2017. En efecto, se produjeron las siguientes movilizaciones generalizadas:

- La marcha docente convocada por las dos CTA el 6 de marzo hacia el Ministerio de Educación.
- La marcha convocada por la CGT del 7 de marzo frente al Ministerio de Producción.
- El paro y la marcha internacional de mujeres del 8 de marzo.
- La marcha federal de la educación del 21 y 22 de marzo.
- La movilización del 24 de marzo en reclamo de memoria, verdad y justicia.
- La movilización del 30 de marzo.
- El paro general del 6 de abril convocado por la CGT.
- El armado de la escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos el día 9 de abril que fue reprimida por las fuerzas de seguridad y luego autorizada a funcionar hasta el día viernes 5 de mayo. El día 9 de mayo la escuela será instalada en la provincia de Formosa.
- El día 10 de mayo se produjo una concentración en Plaza de Mayo para protestar por la conmutación de las penas a genocidas.

Ahora bien, todas estas movilizaciones que defienden derechos establecidos se producen sobre la base de una infinidad de pequeños atropellos diarios a los que se somete a la población que comienza a aprovechar cualquier ocasión para quitarse la bronca. A los aumentos de tarifas, servicios y bienes de consumo habitual se suma el maltrato frente a los reclamos, los caminos burocráticos que no conducen más que a dilaciones, plazas que se desmantelan en pos de refacciones que tardan meses o incluso años (que, además, son de mala calidad lo que lleva a rehacerlas a los pocos meses), escuelas donde se hacen obras que no se solicitan y que suelen agravar los problemas existentes, la privatización del presupuesto público trasladando al sector privado tareas que le competen (como formación docente, unidades de apoyo escolar), infraestructura de mala calidad, cortes de servicios, recorte de programas enteros, entre otros. El abandono de los servicios públicos de educación y salud como acto de provocación hacia los humildes o los modestos que queremos un país más igualitario y justo.

Las movilizaciones más significativas dan cuenta de un conjunto de derechos sobre los que se estaría atentando: los derechos laborales y salariales que afectan a los trabajadores formales; el derecho a la educación en condiciones de justicia distributiva garantizada por el Estado que afecta directamente a 1.200.000 trabajadores y, en sentido amplio, a vastos sectores de la sociedad que se sienten parte de la “comunidad educativa” en torno a las escuelas. En otro orden, los líderes de los trabajadores sindicalizados reclaman un cambio en el rumbo de la política económica del gobierno; en tanto que los

trabajadores desocupados, pertenecientes a cooperativas de trabajo y de la economía informal se oponen abiertamente a la política económica imperante.

Una mención aparte merece el movimiento internacional de mujeres que protagonizó una gran movilización en todo el mundo y que en nuestro país cobró las connotaciones propias del aumento de las agresiones por cuestiones de género, así como la falta de programas de protección a las víctimas y de programas de prevención de las violencias.

Un gran movimiento donde confluyen todas las demás manifestaciones es el de los derechos humanos, reanimado por la desaceleración o el detenimiento de los procesos judiciales para esclarecer delitos de lesa humanidad y, a partir de principios de mayo, agravado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia en voto dividido de conmutar penas a genocidas.

La secuencia muestra un amplio espectro de la sociedad afectado en sus intereses particulares, en su dignidad, en su bagaje moral, ético e ideológico que rechaza las políticas conservadoras en marcha.

De lo expuesto se observa una exaltación del conflicto, su difusión a gran parte de la sociedad, la expansión geográfica y sectorial del mismo, la presencia de numerosas organizaciones; es decir que estamos frente a un nuevo ciclo de protesta en la Argentina.

Decir esto implica reflexionar acerca de las derivas que tiene la situación. Está claro que una escalada de conflicto sólo se debilita o revierte en caso de mediar un cambio profundo en la orientación de la política pública. Tal cosa no está en el menú de opciones de ningún gobierno conservador.

Efectos sobre la representación política

Las protestas tienen varios efectos: a) expresan al Estado y los actores políticos las necesidades e insatisfacciones de los sectores desafiantes, b) actúan sobre el gobierno mediante dos vías: fortaleciéndolo cuando ajusta sus políticas a los reclamos y debilitando su base de sustentación cuando no escucha las demandas o reprime a los manifestantes dejando en evidencia el progresivo déficit democrático del gobierno, por último, c) ponen de relieve la ausencia de interlocutores políticos que encarnen la oposición como forma de encauzar los conflictos presentes en una construcción política e ideológica de cara al futuro.

El arco opositor ha dejado de cumplir su papel como actor político bajo un régimen democrático al estar abocado a la resolución de problemas internos, lo que lo retira del ejercicio de la política competitiva. Salvo escasas excepciones, pareciera que se está a la espera de una próxima instancia electoral para salir

a la competencia política; mientras tanto no cumplen con su papel de opositores –lo que los convierte en cómplices del régimen imperante. Aquí se confunde un instrumento (la lucha electoral) con el contenido de la política y su función como actores de la oposición que traducen la voz de quienes no ganaron la elección previa pero siguen siendo ciudadanos y exigen una Estado que los incluya.

La protesta se inscribe entre los derechos de los actores sociales para insertar sus demandas en el sistema político; en particular cuando ni el Estado ni las restantes instancias de representación canalizan sus expectativas. Por tanto, las movilizaciones conllevan un impulso democratizador. Finalmente, la democracia es la conjunción de derechos formales (plasmados en sus instituciones) y derechos reales; esto puede sintetizarse como el grado de injusticia que una sociedad está dispuesta a tolerar.

Cada una de las protestas tiene un efecto sobre la política pública o sobre los sectores de poder; ya que a la vez que interpelan al gobierno, marcan las características y los condicionamientos para cualquier líder dispuesto a ponerse a la cabeza de dicho impulso. En efecto, todo aspirante a algún cargo legislativo o ejecutivo, debe ver en la protesta los límites dentro de los cuáles deberán inscribirse las políticas públicas en el futuro próximo.

Conclusiones

Las movilizaciones se producen en torno a cuestiones concretas que siguen paso a paso la dinámica política del momento, dan el contenido de la oposición al gobierno en las calles, socavan la gobernabilidad de la alianza PRO- UCR – CC y buscan implícitamente al actor político que canalice sus reclamos puntuales y su programa político de cara a las próximas contiendas electorales.

Las protestas se producen por un conjunto de factores: políticos (el abuso de poder del gobierno), económicos (un deterioro de los índices de crecimiento con el efecto regresivo en el empleo y el salario), sociales (la amenaza persistente de recortes de beneficios y supresión de derechos sociales) e ideológicos (fundados en el rechazo a la mentira y la manipulación que traduce el carácter de clase de la alianza gobernante) que actúan como revitalizadores.

Los episodios muestran una variada gama de motivaciones, actores, repertorios de acción que acaban convergiendo en un gran movimiento entorno a los valores democráticos y a los derechos políticos, económicos y sociales.

Los actores participantes van desde las organizaciones tradicionales –potenciadas por la movilización de la ciudadanía-, las nuevas organizaciones y, en una elevada proporción, por personas que espontánea e independientemente se suman en los momentos clave de la protesta.

Los medios de comunicación de masas respaldan el discurso del gobierno, comenzando a registrarse algún episodio donde se ha tomado distancia de las posturas oficiales. Todo indica que en caso de continuar creciendo el ciclo de protesta acabarán retrayéndose y en la cima del mismo promoverán las movilizaciones.

El gobierno apuesta a silenciar y a criminalizar la protesta, lo que termina incentivándola y, en consecuencia, ello repercute en términos del inicio de fisuras dentro del gobierno acerca de profundizar la estrategia o cambiarla.

Las protestas también impactan sobre el arco opositor donde se encuentran sus potenciales referentes. En efecto, lleva a los dirigentes territoriales en la oposición a intentar encapsular los conflictos para utilizar electoralmente el impulso de contestación. A los legisladores que no se expresan en torno a su obligación republicana de ejercer la oposición los pone en evidencia como claudicantes. A los aspirantes en las próximas elecciones les indica los claros límites en los cuales deberá inscribirse la política pública del futuro próximo.

De lo analizado se puede confirmar el inicio de un ciclo de protesta que aún no ha llegado a la cima. Un ciclo en esta etapa sólo puede ser debilitado o interrumpido si mediare un cambio importante en el contenido de la política pública. Todo indica que la fuerte impronta de clase que condensa el gobierno facilitará la potenciación de los conflictos en curso. Cabe esperar entonces, la profundización del proceso de movilización, el aumento de la represión y, unido a la falta de conducción política del primero, su deriva hacia el conflicto social abierto. Se produce así una espiral de movilización y represión; proceso que abre dos opciones de salida: a) el pueblo toma la iniciativa radicalizando las movilizaciones y construyendo una alternativa de gobierno, o b) la alianza gobernante termina instaurando un Estado autoritario sin complejos (autogolpe).

En las crisis agudas de los regímenes democráticos bajo el capitalismo, la cantidad de vidas que se preservan depende directamente de la capacidad del gobierno de sostener las instituciones existentes, pero también del accionar de la oposición para construir los intermediarios y el contenido de las políticas que direccionen el proceso de contestación.

Es importante oponerse a la explotación pero también generar el contenido y cariz de las políticas de un futuro gobierno de raíz nacional y popular, incluyendo la construcción de los interlocutores políticos que se harán cargo de ello (visto el vacío existente). En este punto falta precisar qué actores sociales y políticos formarían parte de la nueva alianza social; puesto que más allá del activismo de base, lo que define las disputas son las fuerzas sociales con orientación y estrategias políticas y electorales.

En este sentido, los trabajadores deberán ocupar el centro de la escena en la nueva construcción, apuntalados por el resto de los sectores de la industria, el comercio, la banca pública y cooperativa, las empresas públicas en general. De resultados de elucidar quiénes son los sujetos históricos capaces de encarar un régimen de acumulación distinto, es necesario avanzar sobre ejes programáticos que condicionen a los próximos gobiernos. En efecto, urge que los actores se expidan acerca del contenido de la política tributaria, industrial, financiera, sobre la regulación del comercio y el control de cambios, sobre la política adecuada a las economías regionales, entre otras.

El esfuerzo de desarticulación del régimen existente debe tender a la construcción de una sociedad mejor, para ello es importante definir quiénes integran el campo popular y democrático, qué líneas programáticas persiguen y para quiénes serán los beneficios; de lo contrario, corremos el riesgo de destruir lo existente sin tener en claro para qué.

Bibliografía

- Aguilar, S. (2003): “Modelo teórico operacional: las movilizaciones y la estructura de oportunidades políticas”, en Una nueva sociedad civil: acciones colectivas de masas en la España postransicional (1982-2002), Capítulo IV. Fundación Jaime Bofia, Barcelona.
- Kitschelt, H. (1986): “Political opportunity structures and political protest. Antinuclear movements in four democracies”, en British Journal of Political Science, 16, Parte I.
- Kriesi, H. (1992): “El contexto político de los nuevos movimientos sociales en Europa Occidental”, en Las transformaciones de los político, Benedicto, J y Reinares, F. Editores. Ed. Alianza Universidad, Madrid.
- Kriesi, H.; Koopmans, R.; Duyvendak, J.; Giugni, M. (1995): New social movements in Western Europe. A comparative analysis, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Sampedro, V. (2000): Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Ed. Istmo, Madrid.

- Tarrow, S. (2002): “Ciclos de acción colectiva: entre los momentos de locura y el repertorio de contestación”, en Protesta Social, Traugott, S. (comp.). Editorial Hacer, Barcelona.
- Traugott, M. (2002): “Las barricadas como repertorio: continuidades y discontinuidades en la historia de la contestación en Francia”, en Protesta Social, Traugott, S. (comp.). Editorial Hacer, Barcelona.